

PRESENTACION

Hace un año, el Gobierno demócrata cristiano del Presidente Duarte impuso el PROGRAMA DE ESTABILIZACION Y REACTIVACION ECONOMICA (PERE) con los pretendidos objetivos de reducir el déficit fiscal, reducir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y frenar la inflación. Como resultado de una serie de readecuaciones en las políticas fiscales, cambiaria, monetaria y crediticia el Gobierno esperaba la reactivación de la economía mediante el crecimiento de la producción, de la inversión, generación de empleo e ingresos, etc.

El modelo económico de la democracia cristiana en el que se inscriben las medidas adoptadas el año pasado, presuponía por otra parte la continuación del conflicto político militar y su esperada resolución no por medios políticos sino exclusivamente militares.

Contrario a lo esperado por el Gobierno, su Programa Económico no logró modificar la tendencia fundamental de la crisis económica y en el plano militar, el Plan Unidos para Reconstruir de la Fuerza Armada tampoco parece estar consiguiendo los resultados esperados dentro de lo que es la aplicación de la estrategia de Guerra de baja intensidad diseñada por los militares norteamericanos para enfrentar las luchas de liberación y autodeterminación de los países del tercer mundo. Es decir, durante 1986, a nivel económico y social, el déficit fiscal del Estado persistió y se profundizó (cálculos preliminares lo sitúan en cerca de ¢ 1,200.0 millones); el proceso inflacionario se agudizó y por consiguiente el poder adquisitivo de los sueldos y salarios se deterioró aún más, pese al leve incremento de ¢100 al inicio del año que no fué suficiente para enfrentar el alza en los precios; la tasa de desempleo, presenta un incremento del 86% en el período 1982-1986, y el Producto Interno Bruto disminuyó en -1.4 en relación al año pasado, y a nivel per cápita igualmente disminuyó en -1.4% (¢534) según nuestros datos respecto a 1985, y a nivel militar, la guerra ha entrado en una fase de prolongamiento, resistencia y desgaste que, según lo reconociera hace unos años Henry Kissinger, a largo plazo este tipo de conflicto es contraproducente para el Régimen de Gobierno.

Reiteradamente se ha dicho que mientras no se solucione primeramente el conflicto político-militar en forma pacífica, la guerra continuará desgarrando más vidas humanas y profundizando la crisis económica. 1986 es una confirmación inobjetable de esa situación. No obstante, los únicos que no quieren ver y aceptar esta realidad son la Administración Reagan y por consiguiente el Gobierno demócrata cristiano, la Fuerza Armada y la oligarquía, pese a que esta última mantiene sus diferencias con el proyecto de los primeros.

EL PROGRAMA DE REFORMA TRIBUTARIA, fue aprobado en momentos en que el Estado atraviesa una de las más profundas crisis económicas de su historia con el agravante que el terremoto del 10 de octubre del año pasado vino a remacharla aún más. Los efectos inmediatos y las consecuencias posteriores del terremoto, vinieron a confirmar la necesidad existente en nuestra sociedad de que se realicen cambios profundos en las estructuras económicas y sociales con la real participación del pueblo en beneficio de mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora. De igual manera, el terremoto vino a confirmar que es imprescindible solucionar el conflicto; que el Estado no puede continuar gastando una cuarta parte del Presupuesto Nacional en la guerra mientras miles de trabajadores se encuentran sin empleo, cientos de miles de familias desplazadas y refugiadas no pueden regresar a sus lugares de origen, las dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no tienen medicamentos para la población ni suficientes camas en los hospitales, el déficit habitacional sobrepasa el medio millón de unidades, etc.

Pero al Gobierno demócrata cristiano esta realidad no parece preocuparle en lo más mínimo. Al contrario, la guerra de contrainsurgencia continúa siendo el eje central del proyecto político y en este sentido, el Programa de Reforma Tributaria recién aprobado persigue en gran medida el financiamiento de los gastos bélicos a través de los ingresos que el Estado persiva de estas medidas impositivas.

Como era de esperarse, las reacciones de las distintas fuerzas sociales y políticas del país adversando estas medidas han sido generalizadas. Por un lado, la clase trabajadora se opone a este tipo de medidas por considerar que el pueblo es el que en última instancia terminará pagando la guerra además de poner los muertos. Y la empresa privada, por el otro, presionando por un cambio radical en la política económica del Gobierno en beneficio del "libre mercado".

Esta nueva "Coyuntura Económica", que se ha abierto en el país, ha sido objeto de nuestra reflexión y análisis que damos a conocer al público en general como un aporte en la comprensión real de los problemas involucrados y por lo tanto en la búsqueda de una solución a los mismos desde los intereses populares.